

BURUNDI: AMNISTÍA INTERNACIONAL PIDE A LA OUA QUE ASUMA EL CONTROL PARA IMPEDIR NUEVAS MATANZAS

Inmediatamente después de producirse el golpe de Estado en Burundi, Amnistía Internacional formuló un llamamiento urgente a la Organización de la Unidad Africana (OUA) para que asumiera la dirección y movilizara a la comunidad internacional para impedir nuevas matanzas de civiles indefensos.

«Los gobiernos extranjeros, en particular los de los países vecinos, no pueden limitarse a esperar que otros tomen la iniciativa mientras centenares de personas están siendo masacradas en Burundi todas las semanas» declara Amnistía Internacional.

En este momento crítico, la OUA debería realizar un esfuerzo concertado para adoptar medidas prácticas que conviertan la justicia y el respeto de los derechos humanos en elementos indispensables para la paz en Burundi.

Amnistía Internacional condenó el cierre de fronteras en Burundi y pidió a las autoridades de este y de los países colindantes que garanticen la protección inmediata de quienes huyen de la violencia.

Entre los que corren más peligro está la minoría selecta hutu, blanco de los ataques desde 1993. Muchos buscan ahora refugio en embajadas extranjeras. Otros grupos vulnerables son las personas que viven en espacios cerrados, como los presos. Los refugiados hutus ruandeses también son probables objetivos fáciles para la milicia tutsi y los miembros de las fuerzas de seguridad. Las expulsiones forzosas de estos refugiados a Ruanda podrían reanudarse en cualquier momento. Los tutsis desplazados en el interior del país también podrían sufrir nuevas agresiones por parte de grupos armados hutus.

«Los civiles más indefensos pueden morir como consecuencia del golpe de Estado que tuvo lugar la noche del 23 al 24 de julio» ha advertido hoy Amnistía Internacional.

La organización recordó a la comunidad internacional que, en octubre de 1993, el asesinato del presidente Melchior Ndadaye por parte del ejército había desencadenado una serie de matanzas en gran escala entre civiles hutus y tutsis y por parte de tropas gubernamentales y grupos armados.

«Matanzas generalizadas como aquellas son prácticamente inevitables en las circunstancias actuales» ha declarado Amnistía Internacional.

Este último golpe de Estado será interpretado como la negación de las elecciones democráticas de 1993, que, por primera vez,

habían dado a los hutus mayor voz en el gobierno. Es probable que los grupos hutus recurran de nuevo a la violencia como respuesta a este acontecimiento, que a su vez provocará represalias por parte de la milicia tutsi y las fuerzas de seguridad.

Muchos hutus se han escondido tras conocerse las primeras noticias del golpe. Apenas quedan hutus en la capital; una buena parte de la población hutu ha escapado al campo, donde siguen estando expuestos a los ataques. El 23 de julio, los informes recibidos indican que las fuerzas de seguridad dieron muerte a otros cincuenta civiles en Rukaramu, aldea próxima a Buyumbura.

«La población de Burundi, tanto hutu como tutsi, ya ha sufrido bastante a manos de los grupos armados de todos los bandos —señala Amnistía Internacional—. Todos los dirigentes políticos y militares deben hacer públicamente un llamamiento a la calma e impedir que la nueva escena política se convierta en una fiesta de homicidios vengativos. Deben abstenerse inmediatamente de emprender cualquier acción que pueda ser interpretada como una incitación a la violencia.»

INFORMACIÓN GENERAL

El 25 de julio, el ejército anunció que el comandante Pierre Buyoya, miembro del grupo étnico tutsi y presidente de Burundi entre 1987 y 1993, había suplantado en el cargo al hutu Sylvestre Ntibantunganya. El presidente Ntibantunganya lleva dos días oculto en la embajada estadounidense de la capital, Buyumbura, tras ser agredido el 23 de julio en el funeral por los más de trescientos tutsis muertos en Bugendana.

El comandante Pierre Buyoya llegó anteriormente al poder mediante un golpe militar en septiembre de 1987, y abandonó la presidencia tras ser derrotado por el presidente Melchior Ndadaye en las elecciones multipartidistas de junio de 1993.

El ejército, con predominio tutsi, y su aliado político, la Unión para el Progreso Nacional, han ejercido el poder en Burundi desde el intento de golpe de Estado de 1993.